

# Muralla verde

➡ HERNÁN P. FLORÍNDEZ

■ La delincuencia del narcotráfico y de la tala ilegal crece en la selva del Perú. Según un experto, las hectáreas dedicadas a la coca ilegal pasaron de 72,000 a 88,000 y la presión sobre tierras y pobladores se acrecienta



▲ Secando al fuego hojas de coca destinadas a la fabricación de pasta básica de cocaína en la comunidad Flor de Ucayali, provincia de Coronel Portillo (región de Ucayali).

Una peste está acabando con los líderes indígenas. Y no es el Covid-19. Las mafias del narcotráfico y de la tala ilegal han asesinado a 10 líderes indígenas desde que empezó la pandemia. La última víctima es Mario López Huanca. El lunes 28 de junio, poco antes de las 8 de la mañana, un sicario asesinó al líder asháninka de la comunidad nativa de Alto Shirarine. Lo mató de un disparo en la cabeza. Las hermanas de Mario López escucharon el escopetazo y fueron ellas quienes lo encontraron agonizando a pocos metros de su chacra. López tenía 34 años y era el secretario de Ecosira, una organización dedicada a la protección de la reserva comunal El Sira.

Hace dos años que las organizaciones indígenas alertan que el ingreso de invasores en la intersección de las regiones Ucayali-Pasco-Huánuco se ha vuelto incontrolable. Denuncian que los forasteros se apropian de tierras vírgenes para plantar cultivos de coca y montan pozas de maceración. Rara vez la protección del Estado llega antes del asesinato de un miembro de la comunidad.

Una semana previa a este último crimen, Freddy Vásquez, coordinador del sector Pachitea de Ecosira, había estado conversando con Mario López Huanca sobre lo peligroso que se ha vuelto vivir en las comunidades que limitan con la reserva de El Sira. “Él me comentó personalmente que había estado discutiendo constantemente con esa gente que venía a quemar el bosque cerca de la reserva (El Sira). Yo le dije que se cuide de esa gente porque no sabemos cómo pueden reaccionar. Y a la semana le disparan”, narra Vásquez.

Herido de muerte, Mario López fue trasladado al Hospital Regional de Pucallpa. “Llegó con trauma encefalo craneano grave por proyectil de arma de fuego que había generado un estado de muerte cerebral. Su supervivencia se basaba en estar conectado a un ventilador mecánico. Había pérdida y exposición de masa encefálica. (...)”, explica Juan José Aranibar, médico asistente del departamento de emergencias. El cuadro era irreversible y sólo cabía esperar que el corazón dejara de latir. Sucedió cuatro días después. Mario López falleció el jueves 1 de julio. A medianoche, su cuerpo regresó a Puerto Bermúdez en un cajón y el viernes fue enterrado en la comunidad de Alto Shirarine.

Los comuneros dicen que, además de vivir comprometido con la protección de la reserva, López lideraba los trabajos de cultivo del metohuayo, un fruto exótico de gran rentabilidad para las comunidades nativas.

“Mario López notó que estaban botando residuos del pro- ▶▶





▲ Mario López Huanca, líder asháninka de la comunidad Alto Shirarine. Derecha: su velorio en Puerto Bermúdez.

cesamiento de la hoja de coca al río Anacayali. Entonces él fue a enfrentarse a los coccaleros para obligarlos a salir y la respuesta fue un disparo en la cabeza”, dice Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Nosotros informamos al Ministerio de Justicia del atentado y pedimos que se active el protocolo para proteger a los deudos. Claro, este protocolo debería ser preventivo y no cuando ya sucedieron los hechos. Necesitamos un monitoreo mucho más eficaz”, dice Magaly Ávila, directora del Programa de Gobernanza Ambiental de Proética.

Según la Defensoría del Pueblo, desde que empezó la pandemia los asesinatos de líderes indígenas se han incrementado considerablemente. Desde abril del 2020 a la fecha han sido asesinados 10 dirigentes indígenas en zonas asediadas por narcotraficantes y madereros ilegales. Y desde el 2019 el Ministerio de Justicia ha recibido más de una decena de pedidos de auxilio y protección para defensores ambientales amenazados. El asesinato de líderes ambientalistas es una verdadera amenaza para la supervivencia de los pueblos indígenas.

“No estás asesinando solamente a un ciudadano. Dejas en orfandad a toda la comunidad

porque el líder indígena ha pasado por un proceso formativo de años que le permite conocer el funcionamiento estatal, las instancias para hacer las denuncias, el seguimiento de los casos, los derechos de la comunidad. Este conocimiento es muy importante en lugares de casi nula presencia del Estado”, advierte Ávila. La ausencia de un líder juega un papel decisivo para la proliferación y la impunidad de los cárteles y las mafias de los madereros.

En la comunidad Nueva Austria, también situada en la zona de amortiguamiento de la reserva El Sira, los indígenas viven bajo el acecho constante de los narcotraficantes. Padecen amenazas, agresiones físicas, secuestros y ataques con arma de fuego. En el 2019 el presidente de la comunidad sobrevivió a un intento de asesinato en el que recibió cinco balazos. Desde entonces muchas familias han optado por irse de sus tierras.

Ese mismo año, el 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado peruano brindar protección a la comunidad Nueva Austria, pero a la fecha todo sigue igual. “No se ha producido ningún avance. La comunidad ha recibido un papelito donde dice que tiene medidas cautelares, pero en la práctica no

hay ninguna acción concreta. El narcotráfico ha avanzado, tiene nuevas áreas con respecto a lo denunciado hace dos años”, indica Mar Pérez.

Alrededor de la reserva El Sira existen 69 comunidades nativas de los pueblos Asháninka, Ashéninka, Shipibo-Konibo, Yanasha y Kukama Kukamiria. Pero los verdaderos amos allí son las bandas del crimen organizado.

“Es casi una modalidad en esa zona: invaden, talan, deforestan, siembran coca, a veces hacen pequeños caseríos. También he reportado hasta 46 pistas de aterrizaje clandestinas, varias de ellas en comunidades indígenas. Mientras no sean sancionados, mientras haya impunidad, va a seguir siendo atractivo para el narcotráfico asentarse en estas regiones”, señala Yvette Sierra, periodista de Mongabay especializada en asuntos ambientales.

Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos y Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, también advierte que “la impunidad está generando que esto ocurra cada vez más. De todos los casos de personas defensoras asesinadas, los avances son muy pocos. La vida de los líderes está en serio peligro”.

Según fuentes del Minjus,

el presunto asesino de Mario López fue detenido e identificado. En los próximos días la Fiscalía pedirá prisión preventiva para él. Contactado por esta publicación, el fiscal Michael Cisneros Chavarría se negó a confirmar o dar detalle alguno sobre la investigación. Alega que es reservada.

Un comunero, cuya identidad mantenemos en reserva por su seguridad, confirma que, efectivamente, hay un detenido. “Fue un varón joven. Lo encontraron porque se llevó el bote de Mario y algunas de sus cosas. Al final lo atraparon en un hotel”, dice.

“Su vida diaria se ha vuelto un constante enfrentamiento. Los indígenas instan a los coccaleros a retirarse, les hacen denuncias por invasión, por cultivo ilegal y les llegan respuestas de amenazas a sus líderes. Esto está creciendo y ya no lo pueden controlar”, explica Sierra.

Pedro Yaranga, consultor en temas de seguridad pública y narcotráfico, considera que la situación ha empeorado en los últimos años porque no hubo avances en la erradicación de las plantaciones. Y con la pandemia se paralizaron operativos policiales dejando la cancha abierta para la proliferación de las mafias.

“Los informes de la Casa Blanca muestran que en 2019

producimos 72 mil hectáreas de coca ilegal, en el 2020 hemos subido a 88 mil. Se ha disparado. Con la pandemia, ha caído el número de las interdicciones y se ha bajado la guardia también en la promoción del desarrollo alternativo. Se necesita que las Fuerzas Armadas hagan intervenciones especiales y organizar frentes de defensa porque hoy las comunidades están desprotegidas. Desde hace 10 años, en la zona hay más o menos 20 clanes familiares que alientan la producción y el envío de droga. Muchos narcotraficantes se han trasladado desde el VRAEM hasta esa parte de Ucayali y Pasco como estrategia”, explica Yaranga.

En otras ocasiones un operativo policial acarrea represalias que pagan los indígenas cuando las fuerzas del orden se retiran de la zona dejando a las comunidades a su suerte. Una de esas intervenciones policiales en Ucayali ocurrió el 1 de julio. Las organizaciones indígenas de la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali y Afluentes (FECONAU) han advertido que las mafias se están armando para vengarse. Han pedido al Ministerio del Interior y Ministerio de Justicia seguridad con urgencia, pero al cierre de esta nota no han tenido respuesta. Como casi siempre. ■